

**H. SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.**

**ALONSO CAJICA FLORES**, autorizado de las quejas **JACOBO COJAB SACAL** y **JUAN MANUEL FLORES HERNÁNDEZ Y COAGRAVIADOS**, en los autos de los juicios de garantías números 133/2002 III y 502/2002 III, respectivamente, ambos del índice del Juzgado Novenos de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, señalando como domicilio convencional el despacho [REDACTED] marcado con el número [REDACTED]

[REDACTED] Distrito Federal, y autorizando para oír y recibir notificaciones a los señores licenciados Juan Carlos Gutiérrez Rocha, Héctor E. Gallardo Espinosa y América Gutu Moguel así como a los pasantes de derecho Martha A. Solís Rojas, Lucía Guijarro Zárate y Jorge Papik Romo Rodiles, ante ese Alto Tribunal, de la manera más respetuosa, comparezco para exponer:

Vengo de conformidad con lo preceptuado por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a denunciar la contradicción de tesis de entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RA.- 296/2002 promovido por **JACOBO COJAB SACAL**, y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la resolución del amparo en revisión RA.- 3047/2002, interpuesto por **JUAN MANUEL FLORES HERNÁNDEZ Y COAGRAVIADOS**, para cuyo efecto me permito manifestar lo siguiente:

**1. ANTECEDENTES:**

1. El señor **JACOBO COJAB SACAL** interpuso demanda de amparo, reclamando la inconstitucionalidad del artículo 149, fracción II, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal vigente a partir del 1º de enero del año 2002, que establece el procedimiento para determinar el Valor Catastral, base gravable del Impuesto Predial.

- a). La demanda de garantías se radicó en el Juzgado Novenos de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, bajo el número 133/2002 III, habiendo autorizado en los amplios términos a que se contrae el artículo 27,

EXPEDIENTE NO. \_\_\_\_\_  
REGISTRO NA. \_\_\_\_\_  
ACORDAR ☐  
AGREGAR ☐  
A SALA ☐  
A OTRA OFICINA ☐  
ARCHIVO ☐  
RECIBO ☐





SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA  
SEGUNDA SALA  
OFICINA DE ACUERDO

párrafo segundo, de la Ley de Amparo, entre otras personas, al suscrito Alonso Cajica Flores.

- b). Seguida que fue la secuela del procedimiento, por sentencia engrosada y firmada el 9 de agosto del año 2002, el H. Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, resolvió sobreseer en el juicio y negar la protección constitucional demandada.
- c). Inconforme con el fallo del Juzgador natural, la quejosa interpuso recurso de revisión, que fue turnado al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a la ponencia de la señora Magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos y radicado con el número RA.-296/2002.
- d). En sesión de 70 de diciembre del año 2002, el H. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió modificar la sentencia recurrida, sobreseer en el juicio y otorgar la protección constitucional demandada respecto del artículo 149, fracción II, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal vigente a partir del año 2002.

2. Los señores JUAN MANUEL FLORES HERNÁNDEZ, HÉCTOR FLORES HERNÁNDEZ, PILAR FLORES HERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, ULPIANO FLORES FOURNIER, PATRICIA FLORES FOURNIER DE KRIEGER, OCTAVIO FLORES FOURNIER, SANDRA FLORES FOURNIER DE FERNÁNDEZ, DIANA FLORES FOURNIER, DINORAH FLORES REBOLLEDO DE BLASCO, MARCIA FLORES REBOLLEDO DE CAÑIBE y REGINA FLORES REBOLLEDO, hicieron valer juicio de garantías reclamando también la inconstitucionalidad del artículo 149, fracción II, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal vigente a partir del 1° de enero del año 2002, que establece el procedimiento para determinar el Valor Catastral, base gravable del Impuesto Predial.

- a). La demanda de garantías se radicó en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, bajo el número 502/2002 III y se autorizó, también en amplios términos, al suscrito Alonso Cajica Flores.



SUPREMA CORTE  
JUSTICIA DE LA PAZ  
SEGUNDA SECCION  
SECRETARIA DE ACUERDO

b). El H. Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por sentencia engrosada y firmada el 29 de agosto del año 2002, resolvió sobreseer en el juicio y negar la protección constitucional demandada.

c). Inconforme con el fallo del Juzgador natural, la quejosa interpuso recurso de revisión, mismo que se turnó al conocimiento del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a la ponencia del señor Magistrado Alberto Pérez Dayón, y se radicó bajo el número RA-3047/2002.

d). En sesión del 8 de enero del año 2003, el H. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió confirmar la sentencia recurrida, por la que se niega a la quejosa la protección constitucional solicitada en relación con el artículo 149, fracción II, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal vigente a partir del año 2002.

*Ver folio 256  
Punto 5to.*

3. La controversia sometida a la consideración del Poder Judicial de la Federación, se redujo a resolver, en justicia, si el procedimiento previsto en el artículo 149, fracción II, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal vigente a partir del 1º de enero del año 2002, que establece el cálculo del Valor Catastral – base gravable del Impuesto Predial – que deben determinar los contribuyentes que, como las quejosas, otorgan el uso o goce temporal de sus inmuebles, permite revelar, de manera real y objetiva, el patrimonio del gobernado, que, como se expuso en los escritos iniciales de demanda de amparo, es el límite constitucional de la imposición.

Las demandas y las pruebas, las sentencias e, inclusive, los recursos de revisión que dieron origen a criterios de resolución contrapuestos, son esencialmente iguales.

4. El usuario, en mi carácter de autorizado de sendas quejosas, se encuentra legitimado para denunciar las tesis contradictorias, con arreglo en los artículos 27, párrafo segundo, y 197-A, de la Ley de Amparo, pues tiene como propósito el de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por parte del órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros, como lo sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis 2a. LXV/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, Página 585, cuyo tenor literal es el siguiente:



SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA FEDERAL  
SEGUNDA SALA  
SECRETARIA DE ACU

*Continuar*

"AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. PUEDE DENUNCIAR LA CONTRADICCIÓN DE TESIS DEMANDADA DE LA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL EN EL QUE SE LE CONFIRIÓ TAL REPRESENTACIÓN.— El mencionado autorizado se encuentra

facultado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en el que se le otorgó tal representación y otra, ya que si bien en el artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no aparece precisada tal facultad, la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa, pues, entre otras, señala la de realizar cualquier acto que sea necesario para la defensa de los derechos del autorzante, y aunque la denuncia no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la citada legislación se desprende que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas hubieran sido sustentadas, ha de concluirse que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado artículo, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros".

## II. TESIS EN CONTRADICCIÓN:

1. El H. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al conocimiento del amparo en revisión número RA.- 296/2002 promovido por JACOBO COJAB SACAL, derivado del Juicio de Amparo 133/2002 III, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, resolvió otorgar a la quejosa la protección constitucional demandada, en torno al artículo 149, fracción II, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal vigente a partir del 1º de enero del año 2002.

En su sentencia, a fojas 323 y siguientes, el Tribunal Colegiado determinó que... el sistema previsto en el referido artículo 149, fracción II, tercer párrafo, del Código Financiero del Distrito Federal vigente a partir del primero de enero del dos mil dos, no toma en consideración la modificación patrimonial real del contribuyente, sino que determina un aumento en la base gravable del tributo a través de la aplicación del citado factor, sin que exista una justificación jurídica para ello, es decir, altera la base gravable sobre el que deberá calcularse la contribución, sin que esté demostrado que operó en la realidad un cambio en el patrimonio de los causantes que los afecte en forma positiva, sino



SUPREMA CORTE  
JUSTICIA DE LA NAC  
SEGUNDA SAL  
SECRETARIA DE ACUERDO



como resultado de una mera ficción, es decir, sin atender a la capacidad contributiva real de los contribuyentes al sistema fundado en las contraprestaciones recibidas por otorgar el uso o goce temporal del inmueble a un tercero".

"Resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis número P/J.109/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, visible en la página veintidós, que dice:

**"CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS" (SE TRANSCRIBE).**

"No es obstáculo para la anterior afirmación, el hecho de que la cuota aplicable a tarifa de la base gravable que nos ocupa, en vigor también a partir del primero de enero del dos mil dos (artículo 152 del Código Financiero del Distrito Federal), haya disminuido; y que, por tanto, no obstante el aumento en la base gravable, la diferencia en el importe a pagar sólo se haya incrementado en un cinco punto treinta y nueve por ciento (5.39%), como sostuvo la autoridad responsable, dado que, como ya se dijo, no está a discusión el importe total del impuesto a enterar o la diferencia entre la cantidad enterada el ejercicio inmediato anterior y el actual, sino que lo que se controvierte es que la base gravable prevista en el precepto tildado de inconstitucional, como elemento esencial del tributo, resulta desproporcionado en la medida que prevé un valor irreal y ficticio".

"Desde luego, no pasa inadvertido que la autoridad responsable afirmó que de no haberse introducido el factor diez punto cero (10.0) en la base impositiva de que se trata, se ocasionaría que como consecuencia de haber ajustado los valores unitarios de la tarifa prevista en el artículo 152 del código tributario local, según afirma, a valores de mercado, y dado que tanto los contribuyentes del impuesto predial que tributan bajo el sistema de valores unitario, como los que lo hacen conforme al sistema base renta, deben aplicar la misma tasa, pagarían un impuesto mayor aquellos contribuyentes que no destinan el inmueble de su propiedad o posesión al uso o goce de un tercero que aquellos contribuyentes que sí otorgan sus inmuebles para tal destino".

"Empero, siendo exacto que en todos los casos se ha estimado que el régimen previsto en materia del impuesto predial persigue fines extrafiscales, entendidos como objetivos distintos del recaudatorio que se pretenden alcanzar con el establecimiento de determinada contribución, los cuales son perfectamente compatibles con los principios de proporcionalidad, equidad, legalidad y destina al gasto público consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, no menos exacto es que la



SUPREMA CORTE D  
JUSTICIA DE LA NACIO  
SEGUNDA SALA  
SECRETARIA DE ACUSADO

existencia de un fin extrafiscal, no puede convertirse en un elemento aislado que justifique la violación de esos principios".

"Ilustra esta consideración la tesis P.CIV/99, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, visible a página quince, que es del tenor siguiente:

**"CONTRIBUCIONES. LOS FINES EXTRAFISCALES NO PUEDEN JUSTIFICAR LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"**  
(SE TRANSCRIBE)

"Por las razones expresadas, este Tribunal llega al convencimiento de que en el caso, asiste la razón a la recurrente cuando sostiene que el precepto 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal en vigor a partir del primero de enero del año dos mil dos, resulta violatorio del principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, dado que altera la base gravable del impuesto en la medida que no está demostrado que la inclusión del factor diez punto cero (10.0) arroje como resultado el valor real o de mercado de los inmuebles que se otorgan para el uso o goce temporal de un tercero, que se indicativo de su capacidad contributiva".

2. El H. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la resolución del amparo en revisión RA.-3047/2002, interpuesto por JUAN MANUEL FLORES HERNÁNDEZ y COAGRAVIADOS, derivado del Juicio de Amparo 502/2002 III, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, determinó negar el amparo solicitado por la quejosa respecto del artículo 149, fracción II, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal vigente a partir del 1º de enero del año 2002.

En las consideraciones de su fallo, al pretender hacerse cargo de los agravios expuestos por la parte recurrente, el Tribunal Colegiado consideró, a fojas 150 y siguientes de su resolución que "...son infundados los conceptos de agravio expresados por los recurrentes, en el sentido de que la disposición legal reclamada resulta violatoria de las garantías de proporcionalidad y equidad previstas por el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna, pues este tribunal corrobora lo resuelto por el a quo, en cuanto que el factor 10 previsto en el precepto legal reclamado, representa un incremento en comparación con el año próximo pasado, correspondiente al 5.39%, que corresponde a la variación porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre del dos mil correspondiente a 332.991 puntos (publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho



de diciembre de dos mil) y al mes de noviembre de dos mil uno correspondiente a 350.932 puntos (publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de noviembre de dos mil uno); y los recurrentes no desvirtúan el razonamiento que llevó a la conclusión respecto a que el impuesto predial, si bien incrementó su base con motivo del factor 10, sin embargo del conjunto de operaciones y tarifas aplicadas, dio como resultado que el incremento en relación con el año próximo pasado sea sólo del 5.39%, lo que significaba que si se atendió a su capacidad contributiva".

"En el caso, la línea planteada en el juicio de garantías, versó sobre el cuestionamiento de que la reforma al precepto legal reclamado, afectaba su capacidad contributiva, lo cual estimo violatorio de la garantía de proporcionalidad tributaria, por lo tanto, es irrelevante que mencionen que conforme a los valores unitarios para el cálculo del impuesto predial a que se refiere el párrafo primero del artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal, es excesiva la aplicación del factor 10.0, ya que en el caso el impuesto predial se está generando por el otorgamiento del uso o goce del predio referido, y a partir del cálculo de las rentas generadas se realiza el cálculo del impuesto".

"A fojas 154 de la sentencia del H. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, obra el razonamiento consistente en que "... A efecto de definir este concepto, basta citar la jurisprudencia número P./J.109/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 22 del Tomo X, noviembre de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente:

**"CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PUBLICOS" (SE TRANSCRIBE)**

"Dicho lo anterior y tomando en cuenta que para calcular la base del impuesto predial a que se refiere el segundo párrafo de la fracción II, del artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal vigente, en el supuesto de que los contribuyentes otorguen el uso o goce temporal de un inmueble (arrendamiento), debe atenderse al monto del producto sin que ello signifique que no se atienda a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos".

"Al efecto, y como fue expuesto en la sentencia recurrida, se multiplica el total de las contraprestaciones que correspondan a un bimestre por el factor 38.47 y al resultado se multiplica por el factor 10.0, aplicando al resultado la tarifa del artículo 152, fracción I de este Código".

"Ahora bien, de la anterior transcripción se desprende que no incide sobre el valor comercial del inmueble, ya que el factor 10.0 sólo se aplica al monto total de las



contraprestaciones (producto de la renta), pero no al valor comercial del inmueble, por tanto no se viola el principio de proporcionalidad tributaria ya que al gravarse únicamente la contraprestación, se está atendiendo precisamente a la capacidad contributiva de los quejosos, pues no se modificó la base gravable para el cálculo del impuesto predial tratándose de inmuebles dados en arrendamiento; aunado a que en el propio ordenamiento legal se hicieron ajustes a los límites a que se refiere el artículo 31 y al porcentaje que se aplica a dicho límite inferior, tan y como se desprende del contenido del aludido precepto".

"En consecuencia, es correcto el análisis gráfico y matemático que se realizó en la sentencia recurrida ya transcrita, de donde se coligió que el valor catastral del inmueble determinado a través del procedimiento base rentas, continúa siendo el mismo que el año próximo pasado, con la diferencia de que actualmente se aplica el factor 10.0, siendo además acertada la conclusión respecto a que comparando el impuesto enterado el año pasado y el del presente año, existe una diferencia porcentual entre ambas cantidades de 5.39%, lo cual no es exorbitante ni distorsiona el valor catastral en un mil seiscientos por ciento el monto de ese impuesto predial".

"Así entonces, este tribunal concluye que el porcentaje que la recurrente pagó de más para el presente año no es sustancialmente mayor al que pagó el año anterior, por lo que se concluye que no es desproporcional y si toma en cuenta la capacidad contributiva del obligado".

### III. EXISTE DIVERGENCIA DE CRITERIOS:

1. Las tesis contendientes se emitieron por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, que son competentes para resolver los recursos de revisión que se interpusieron a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 82, 83, fracción IV, 84, fracción I, inciso a), 86, 88, 89 y demás relativos de la Ley de Amparo y con base en los Acuerdos números 6/1999, 1/2000 y 10/2000, emitidos por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2. Se encuentran colmados los extremos para que el más Alto Tribunal de la Nación decida la tesis que, con el carácter de jurisprudencia, deba prevalecer, por cuanto que al resolver los planteamientos sometidos a su consideración, los Tribunales Colegiados examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adoptaron posiciones discrepantes; la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones de las sentencias respectivas, y los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos, como

El presente es un documento que contiene información confidencial y no debe ser distribuido fuera del ámbito de su competencia.

Se informa que el presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACION  
SEGUNDA SALA  
SECRETARIA DE ACUERDO



lo determinó en la Tesis P/J. 26/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, Página 76, cuyo rubro es: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA"

3. Los Tribunales Colegiados Octavo y Séptimo de Distrito, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sus respectivas sentencias, sustentaron criterios discrepantes al haberse pronunciado en torno a la constitucionalidad del artículo 149, fracción II, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal vigente a partir del 1º de enero del año 2002.

Ello, en razón de que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostiene la inconstitucionalidad del artículo 149, fracción II, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal en vigor a partir del 1º de enero del año 2002, por cuanto que – la reforma cuestionada – no toma en consideración la modificación patrimonial real del contribuyente, sino que determina un aumento en la base gravable del tributo a través de la aplicación del citado factor, sin que exista una justificación jurídica para ello, es decir, altera la base gravable sobre el que deberá calcularse la contribución, sin que esté demostrado que operó en la realidad un cambio en el patrimonio de los causantes que los afecte en forma positiva, sino como resultado de una mera ficción, es decir, sin atender a la capacidad contributiva real de los contribuyentes al sistema fundado en las contraprestaciones recibidas por otorgar el uso o goce temporal del inmueble a un tercero.

A su vez, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió la constitucionalidad del artículo 149, fracción II, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal en vigor a partir del 1º de enero del año 2002, en cuanto que el factor 10 previsto en el precepto legal reclamado, representa un incremento en comparación con el año próximo pasado, correspondiente al 5.39%, que corresponde a la variación porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre del dos mil correspondiente a 332.991 puntos (publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre de dos mil) y al mes de noviembre de dos mil uno correspondiente a 350.932 puntos (publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de noviembre de dos mil uno); y los recurrentes no desvirtúan el razonamiento que llevó a la conclusión respecto a que el impuesto predial, si bien incrementó su base con motivo del factor 10, sin embargo del conjunto de operaciones y tarifas aplicadas, dio como resultado que el incremento en relación con el año próximo pasado sea sólo del 5.39%, lo que significaba que si se atendió a su capacidad contributiva.

1

2

3

4



SUPREMA CORTE D  
JUSTICIA DE LA NACIO  
SEGUNDA SAL  
SECRETARIA DE ACUERDO

**IV. TESIS QUE DEBE PREVALECER:**

La divergencia de criterios, que habrá de ser superada por el más Alto Tribunal de la Nación, se encuentra referida a determinar si el artículo 149, fracción II, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal vigente a partir del 1º de enero del año 2002, que establece el procedimiento de determinación de valor catastral, tratándose los contribuyentes que otorgan el uso o goce temporal de sus inmuebles, permite revelar el patrimonio de imposición del gobernado y, en consecuencia, es respetuoso de los principios de proporcionalidad y equidad consagrados por el artículo 31, fracción IV, de nuestra Ley Fundamental.

El precepto sometido a un juicio de equilibrio en sede constitucional, cuya análisis dio origen a tesis discrepantes, presenta el tenor literal siguiente:

**"Artículo 149.-** La base del impuesto predial será el valor catastral determinado por los contribuyentes de acuerdo a lo siguiente:

I.- ...

II.- Cuando los contribuyentes otorguen el uso o goce temporal de un inmueble, inclusive para la instalación o fijación de anuncios o cualquier otro tipo de publicidad, deberán calcular el impuesto con base en el valor catastral más alto que resulte entre el determinado conforme a la fracción anterior y el que se determine de acuerdo al total de contraprestaciones por dicho uso o goce temporal.

Al efecto, se multiplicará el total de contraprestaciones que correspondan a un bimestre por el factor 38.47 y el resultado se multiplicará por el factor de 10, y se aplicará al resultado la tarifa del artículo 152, fracción I de este Código.

...".

El valor catastral, base gravable del Impuesto Predial, se determina, por parte de los contribuyentes, aplicando uno de 3 procedimientos: 1º. *Avalúo*, 2º. *Valores Unitarios* (Artículo 149, fracción I, Código Financiero del Distrito Federal), y 3º. *Base Renta* (Artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal).

La aplicación de los Valores Unitarios, como se reconoció oficial y públicamente y es incluso comprobable con las reformas al Código Financiero del Distrito Federal para el año 2002, alcanzaban a reflejar sólo el 10% (DIEZ POR CIENTO) del valor de un inmueble.



SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACION  
SEGUNDA SALA  
SECRETARIA DE ACUERDO

Por otra parte, desde 1995 y hasta el año 2001, el artículo 149, fracción II, párrafo segundo, del Código Financiero, establecía el procedimiento de determinación del valor catastral, base gravable del Impuesto Predial, señalando que: "Al efecto, se multiplicará el total de contraprestaciones que correspondan a un bimestre por el factor 38.47 y aplicarán al resultado la tarifa del artículo 152, fracción I de este Código".

El procedimiento indicado, denominado "Base Renta", fue revisado por el más Alto Tribunal de la Nación, quien emitió la jurisprudencia firme consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Octubre de 1996, Tesis P.J.J. 61/96, Página 75, bajo el rubro: "PREDIAL. EL ARTICULO 149, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD AL FIJAR EL IMPUESTO CON BASE EN EL VALOR CATASTRAL DEL INMUEBLE, DETERMINADO, RESPECTO DE LOS QUE OTORGAN EL USO O GOCE TEMPORAL, CONFORME A LAS CONTRAPRESTACIONES QUE OBTIENEN".

En la jurisprudencia que se invoca, el máximo intérprete de la Constitución Política Mexicana determinó que la aplicación del factor 38.47 a las contraprestaciones correspondientes a un bimestre, permite obtener el valor real del inmueble.

Cabe decir, que el valor determinado conforme a las contraprestaciones por otorgar el uso o goce temporal de un inmueble, sólo permitía reflejar, de manera aproximada, el 60% o hasta el 76% del valor de mercado del inmueble.

El día 23 de diciembre de 1999, se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* el Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo artículo QUINTO Transitorio se estableció que "Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las legislaturas de los estados, en coordinación con los municipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad".

Si bien el Constituyente Permanente se refirió literalmente a la base gravable del Impuesto Predial que se obtiene aplicando "Valores Unitarios", en la iniciativa de reformas



al Código Financiero del Distrito Federal para el año 2002, el Jefe del Gobierno del Distrito Federal invocó dicha disposición para plantear la reforma al artículo 149, fracción II, párrafo segundo, del propio Código Financiero del Distrito Federal, que establece la base gravable del Impuesto Predial que se obtiene con contraprestaciones por otorgar el uso o goce temporal de un inmueble, que se denomina *Base Rentas*.

Al respecto, en la iniciativa en comentario, se señala lo siguiente: "En esta fracción se proponen modificaciones, con el propósito de adecuar nuestra legislación fiscal con lo dispuesto por el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de diciembre de 1999".

Cabe mencionar, en forma adicional, que en la iniciativa de reformas al Código Financiero del Distrito Federal, se propuso además la reforma de su artículo 151, para señalar que los valores unitarios se equiparan a los valores de mercado, pues al respecto se indicó "También, considerando que conforme a lo dispuesto por el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de diciembre de 1999, los valores unitarios se están equiparando a los de mercado, se estima necesario suprimir del segundo párrafo la expresión "circunstancias tales como"

Por mandato del Constituyente Permanente y por reconocimiento expreso del Legislador Ordinario, el valor de un inmueble que se obtenga con base en la aplicación de *Valores Unitarios*, permite reflejar de manera real y objetiva el valor de mercado de un inmueble y la capacidad de prestación del contribuyente - gobernado.

La iniciativa de reformas fue aprobada sin mayor miramiento por el Legislador Ordinario responsable, pues al respecto, incrementó los *Valores Unitarios* en un 1000 % (UN MIL POR CIENTO), lo que se estima justo, pues como se expuso líneas arriba, tales valores sólo alcanzaban a representar el 10% del valor de mercado de un inmueble.

No obstante, tratándose del procedimiento de determinación de valor catastral *Base Renta*, que según la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación permitía reflejar el valor de mercado de un inmueble, la aplicación del factor de 10, que no implica otra cosa que incrementar el 1000% el valor imponible de un inmueble hasta el año 2001, debe llevar a la ineludible conclusión de que los contribuyentes deben pagar el Impuesto Predial sobre una base gravable que excede entre un 600% y un 760% el valor de mercado de los inmuebles de su propiedad.





En el caso del Impuesto Predial, la proporcionalidad de la carga fiscal radica en los valores que afecta, de tal manera que es la riqueza – real y objetiva – que representa un bien inmueble, el límite constitucional de la imposición.

El ideal de justicia que debe cumplir el Legislador Ordinario, es acercarse, lo más que pueda, a la capacidad contributiva personal del contribuyente o a la capacidad contributiva real, si el tributo se decreta en razón directa de la propiedad o posesión de un bien inmueble, fuente del Impuesto Predial.

En sus demandas de garantías, las quejasas se dolieron de que la hipótesis normativa impugnada contraviene el principio de proporcionalidad tributaria, por cuanto establece un procedimiento de determinación de la base gravable del Impuesto Predial, para el caso de los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de sus inmuebles, que arroja como resultado un valor de tributación que carece de proporción, que es exorbitante, ficticio, erróneo e injusto, y por tanto, no atiende a la capacidad económica del contribuyente, ajeno al imperativo constitucional invocado.

El planteamiento sometido a la consideración del Poder Judicial de la Federación no tiene por objeto resolver si es posible o no determinar un valor de tributación, real y posible, con base en contraprestaciones o rentas, porque desde 1996, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia firme que no deja lugar a dudas de que – aunque no con el procedimiento cuya constitucionalidad se cuestiona – sí es permisible determinar el valor catastral de un inmueble, con base en las contraprestaciones por otorgar su uso o goce temporal, pues al pactarse tales contraprestaciones se atiende al valor real del inmueble.

En diverso orden de ideas, como lo sostiene en Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, es inadmisibles considerar que un precepto fiscal es constitucional, porque el impuesto subió poco, mucho o regular.

Si con la creación de la norma el Legislador Ordinario no propuso un incremento del Impuesto Predial, tales propósitos son ajenos y devienen en irrelevantes para el análisis de la norma impugnada, pues en un problema de constitucionalidad de leyes lo que rige es el producto de la voluntad del órgano encargado de la expedición del ordenamiento cuestionado.

En el presente expediente se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la resolución de los recursos de amparo interpuestos por el Sr. [Nombre], contra el [Entidad], en el [Lugar], el [Fecha].

Se ha considerado que el acto reclamado es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por lo tanto, se ha emitido la siguiente resolución:

Se declara nulo el acto reclamado.

En consecuencia, se ha emitido la presente resolución, para que el Sr. [Nombre] pueda ejercer sus derechos y libertades constitucionales.

Se ha emitido la presente resolución en el [Lugar], el [Fecha].

Se ha emitido la presente resolución en el [Lugar], el [Fecha].

Se ha emitido la presente resolución en el [Lugar], el [Fecha].

Se ha emitido la presente resolución en el [Lugar], el [Fecha].



SUPREMA CORTE  
JUSTICIA DE LA NAC.  
SEGUNDA SAL  
SECRETARIA DE ACUERDO

Por exigencia constitucional, los impuestos deben ajustarse a la capacidad económica de quienes han de pagarlos, que en el caso, esa capacidad se encuentra determinada por el valor real y posible del inmueble de que se trate.

En la demanda de amparo, la proporcionalidad se formula como un principio de relación, pues la conclusión de su observancia se logra de comparar 2 valores: el de *Base Renta*, que resulta de aplicar el procedimiento contenido en el artículo 149, fracción II, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal, y el que se obtiene aplicando *Valores Unitarios*, que desde el punto de vista de la quejosa permite obtener el valor real y objetivo de un inmueble.

En el orden de ideas anotado, la norma reclamada será proporcional, en la medida que su aplicación permita revelar, en términos reales y objetivos, el patrimonio de imposición del gobernado. *A contrario sensu*, si el valor obtenido rebasa la manifestación de riqueza del gobernado, la conclusión obligada será entonces, que la norma no es proporcional y, por tanto, no se ciñe al precepto constitucional.

La conclusión de proporcionalidad se desprende de las razones que motivaron la reforma, de los fines que con ella se persiguen y del contenido mismo del ordenamiento cuya constitucionalidad se cuestiona.

Las razones que motivaron la reforma son – a no dudarse – “... adecuar nuestra legislación fiscal con lo dispuesto por el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de diciembre de 1999”.

El fin que se persigue con la reforma es, según la literalidad del texto del artículo Quinto Transitorio que se invoca y el señalamiento expreso del Jefe del Gobierno del Distrito Federal responsable, “... que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad ...”.

El término “Valor de Mercado” a que se refiere el Constituyente, es la expresión monetaria del valor de un bien; es la cantidad que un comprador estaría dispuesto a pagar por un bien en condiciones libres; es el costo de reposición de un bien, por compra directa o por producción.



Por lo que se refiere al contenido del Código Financiero del Distrito Federal, cabe decir que el valor catastral que se determina con base en *Valores Unitarios* toma como elementos: los metros cuadrados de suelo, los metros cuadrados de construcción, el "Tipo", "Clase" y "Presentación" de las construcciones, la antigüedad de las edificaciones e, inclusive, las instalaciones especiales.

El Legislador Ordinario, obediente del mandato del Constituyente Permanente, ha emitido valores unitarios de suelo y construcciones, que según indica literalmente, reflejan el valor de mercado de un inmueble, por lo que es obligado concluir que diverso valor que es muy superior, obtenido con base en la aplicación y multiplicación indiscriminada de factores, es ficticio y no guarda una ninguna proporción con la riqueza que hace aptos a los contribuyentes para contribuir al gasto público.

El artículo 151 del Código Financiero del Distrito Federal se invoca para sostener que los Valores Unitarios reflejan, como lo ordenó el Constituyente Permanente y lo expresa literalmente el Legislador Ordinario, el valor - real y objetivo - de mercado de un inmueble, es decir, el patrimonio de imposición del contribuyente - gobernado, pero de ninguna manera para argumentar la inconstitucionalidad del artículo 149, fracción II, párrafo segundo, del propio ordenamiento, por su posible contravención respecto del precepto primeramente citado.

El análisis de la disposición reclamada permite afirmar que es desproporcionada y, por tanto, violatoria del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política, en cuanto establece un procedimiento de determinación del valor catastral, tratándose de contribuyentes que - como la quejosa - otorgan el uso o goce temporal de sus inmuebles, que carece de proporción, que es fuera de la realidad, ficticio, erróneo e injusto.

En su sentencia, el H. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió negar la protección constitucional demandada, considerando que si bien el factor 10.0 previsto en la fracción II del artículo 149, eleva la cantidad resultante del valor catastral no significa que se aumente el valor del inmueble pues dicho factor únicamente constituye un mecanismo tendiente a actualizar los impuestos en razón del índice inflacionario determinado a partir del Índice Nacional de Precios al Consumidor el cual constituye un indicador de los cambios económicos derivados del proceso inflacionario, lo que no significa que forme parte del cálculo de valor catastral.

Nos permitimos disentar de la sentencia del mencionado Tribunal, porque el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política Mexicana, establece la obligación de los



mexicanos de contribuir a los gastos públicos de la Federación, Estados, Distrito Federal y municipios, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Con arreglo al texto constitucional, pagamos impuestos, como razón primera, para contribuir al gasto público y, como causa inmediata, por ser depositarios de capacidad contributiva. En este sentido, la capacidad contributiva es la razón que nuestra Ley Fundamental asume como necesaria y suficiente para justificar que al verificarse determinado presupuesto derive la obligación tributaria.

En los términos indicados, todas las situaciones o hechos a los cuales está vinculado el nacimiento de la obligación tributaria deben tener por característica la de evidenciar una manifestación de riqueza.

Así lo ha sostenido el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, Tesis P./J. 109/99, Página 22, que señala lo siguiente:

**"CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS.-**

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto".

De la letra del criterio transcrito se desprende, además, que el máximo intérprete de la Constitución Mexicana, concluye que la constitucionalidad de una norma tributaria exige la identificación o una estrecha relación del hecho imponible con la base gravable, en tal sentido que sólo se contribuya en la medida de nuestros haberes. Tanto más acentuada sea la identificación entre el hecho imponible y la base gravable, tanto más se pone en

B

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



SUPREMA CORTE D  
JUSTICIA DE LA NACION  
SEGUNDA SALA  
MONTANA DE ACUERDO

Q



evidencia la proporcionalidad como una exigencia y presupuesto de la obligación constitucional.

El precepto normativo reclamado no honra el principio constitucional invocado, porque el valor de tributación que se obtiene con su aplicación rebasa sensiblemente la capacidad contributiva del gobernado, habida cuenta que el Factor de 10.0 que introdujo la reforma cuya constitucionalidad se cuestiona no se encuentra justificado, ni técnica ni desde el punto de vista jurídico, para constituir un elemento que permita revelar la capacidad contributiva del sujeto obligado, por lo que la imposición no descansa en una base gravable real y cierta, sino ficticia, errónea e injusta.

La defensa de las autoridades fiscales y la sentencia del Séptimo Tribunal Colegiado, descansan en la argumentación consistente en que si es permisible determinar el valor catastral de acuerdo con las contraprestaciones por el otorgamiento del uso o goce temporal del inmueble de que se trate, y en que el precepto reclamado no es violatorio del artículo 31, fracción IV, de la Constitución, porque el Impuesto Predial sólo se incrementó en un 5.39% para el año 2002.

Estas razones, en nuestro entendimiento, no justifican la reforma fiscal cuestionada, porque la amparista asumió, desde su escrito inicial de demanda de amparo, que como lo sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del procedimiento vigente hasta el año 2001, las rentas que produzca el inmueble, si pueden revelar su valor; aunque de ninguna manera y forma se conviene que un valor real y objetivo se obtenga aplicando la mecánica que se establece en el artículo 149, fracción II, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal vigente en el año 2002.

Por otra parte, es inadmisibles para un Tribunal Colegiado sostener la constitucionalidad del procedimiento de determinación del valor catastral, base gravable del Impuesto Predial, con el argumento de que la carga fiscal se incrementó sólo el 5.39%, porque lo que se ventila en el juicio de amparo es la afectación jurídica que irroga la asignación de la base gravable, no un perjuicio económico.

A mayor abundamiento, el precepto cuestionado no toma en consideración la modificación patrimonial real del contribuyente, sino que determina un aumento en la base gravable del tributo a través de la aplicación del citado factor, sin justificación jurídica para ello, es decir, sin que haya operado en la realidad un cambio en el patrimonio de los causantes que los afecte en forma positiva, sino como resultado de una mera ficción, o lo que es lo mismo, sin atender a la capacidad contributiva real de los contribuyentes.



ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA FISCALIA



SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACION  
SEGUNDA SALA  
SECRETARIA DE ACUERDO



Si la base gravable no se encuentra determinada en proporción al valor del inmueble, sino que tiene sólo el propósito de incrementar su valor fiscal para que el contribuyente pague un 5.39% más que en el año 2001, debe asentirse que la norma es inconstitucional porque no toma en consideración el patrimonial real del contribuyente.

Estos argumentos se recogieron de la jurisprudencia de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Mayo de 2001, Tesis 1ª/J. 11/2001 y 2ª LXIX/2001, Páginas 244 y 477, cuyos rubros, respectivamente, son "TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, IMPUESTO SOBRE EL ARTÍCULO 15-B DE LA LEY RELATIVA QUE PREVÉ LA FORMA EN QUE DEBERÁ CALCULARSE EL TRIBUTO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE Y MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO)", y "DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN I, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE RETENER EL IMPUESTO QUE SE OBTENGA DE APLICAR LA TASA DEL 5% SOBRE LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR AQUÉLLOS POR EL FACTOR PREVISTO EN EL PROPIO ARTÍCULO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA".

La inclusión del factor 10.0 en el procedimiento de determinación del valor catastral obedece en nuestro concepto, según los antecedentes que precedieron a la reforma y a la exposición de motivos del Código Financiero del Distrito Federal para 2002, a una desatención de los principios constitucionales que rigen la imposición.

Por lo expuesto y fundado,

A la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la manera más respetuosa, pido se sirva:

**PRIMERO.**— Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, denunciando la contradicción de tesis de entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.



SUPREMA CORTE  
JUSTICIA DE LA PAZ  
SEGUNDA SALA  
SECRETARIA DE ACUERDO

**SEGUNDO.**— Dar vista a la Procuraduría General de la República para que exponga su parecer dentro del término establecido para ello.

**TERCERO.**— Requerir a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito contendientes, para el efecto de que se sirvan remitir a ese Alto Tribunal, los expedientes que dieron origen a las tesis sujetas a contradicción.

**CUARTO.**— En su oportunidad, resolver la existencia de tesis en contradicción, determinando que debe prevalecer — con el carácter de jurisprudencia — la sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

**PROTESTO LO NECESARIO.**

México, Distrito Federal, siendo los catorce días del mes de febrero del año dos mil



SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACION

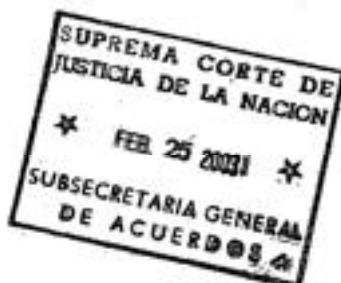
FEB 25 10 07 AM 2003

OFICINA DE  
CERTIFICACION JUDICIAL  
Y CORRESPONDENCIA

502659

Recibido por correo ☐ de un enviado ☒ en (19) Hojas.  
por mensajería ☐ con (1) copias  
y ☐ anexos en ☐ hojas.  
Se agrega sobre ☐  
Observaciones: \_\_\_\_\_

GUTIERREZ CRUZ ARTURO  
GUCA-861020



SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACION  
SEGUNDA SECCION  
SECRETARIA DE ACUERDOS